

La herida que no cierra

Felipe Balmaceda
Facultad de Economía y
Negocios UNAB



Chile, alguna vez un referente de estabilidad y desarrollo en América Latina, ha transitado una preocupante trayectoria de deterioro político, social y económico desde la revuelta de octubre de 2019. Lejos de haber resuelto las demandas subyacentes, la respuesta política y los eventos posteriores han desencadenado una espiral de desorden, inseguridad y estancamiento.

El retroceso en el ámbito de la paz y la seguridad ciudadana es elocuente. El Índice de Paz Global (GPI), que mide la tranquilidad de los países, ha reflejado esta caída. Chile se situaba en el puesto 26 a nivel mundial en 2018 y hoy se ubica en el puesto 69.

Las cifras de delincuencia confirman esta tendencia: un aumento sostenido de los delitos de mayor connotación social, robos con intimidación, y la irrupción y consolidación del crimen organizado en territorios antes ajenos a estas dinámicas.

En 2018 había 845 homicidios por ca-

da 100 mil habitantes; en 2024 hubo 1.207, un aumento del 31,8%. Las extorsiones se han más que duplicado. Esto deteriora el bienestar individual, disuade la inversión, afecta el turismo y erosiona el tejido social.

En el plano económico, la robustez pre-2019 se ha erosionado significativamente. La tasa de desempleo era del 6,9% en 2018 y del 8,4% en el último trimestre de 2025. El empleo en el gobierno central ha experimentado un crecimiento sostenido, sin un correlato claro con la mejora de los servicios ni con la eficiencia.

Esto plantea interrogantes sobre la sostenibilidad fiscal a largo plazo y la capacidad del sector público para gestionar los recursos de manera óptima, especialmente en un contexto de menor crecimiento y mayores demandas sociales.

Las listas de espera en salud se han exacerbado. En 2019, las listas no AUGE superaban los 2 millones; hoy esta cifra supera los 3 millones, lo que refleja no

solo un desafío sanitario, sino también ineficiencia en la gestión pública.

A la luz de las promesas del gobierno a su base de votantes más leales, emerge el FES. Este no resuelve los problemas de financiamiento, eficiencia y calidad de la educación superior. A su vez, generará incentivos perversos, algunos ya constatados por el anuncio de

condonación, exacerbará la compleja situación financiera de muchas instituciones, pondrá en riesgo la independencia universitaria y creará nuevas cargas fiscales.

El panorama resultante es una sociedad más insegura, una eco-

nomía que lucha por recuperar su dinamismo, servicios públicos saturados y reformas que han minado los pilares de la estabilidad.

Es imperativo que la sociedad chilena priorice la estabilidad, el crecimiento y la reconstrucción del tejido social, antes de que el legado de 2019 se convierta en una herida permanente.

“Es imperativo que la sociedad chilena priorice la estabilidad, el crecimiento y la reconstrucción del tejido social”.